

Bogotá, 14/02/2024

Al contestar citar en el asunto



Radicado No.:

**20245330078911**

Fecha: 14/02/2024

Señor (a) (es)

**Servicios De Carga y Transportes Veloz S.A.S.**

Calle 4 No 17 - 84 Barrio Los Almendros

SantaMarta, Magdalena

Asunto: **12732 Notificacion de Aviso**

Respetado Señor(a) o Doctor(a):

De manera atenta, me permito notificarle que la Superintendencia de Transporte, expidió la(s) resolución(es) No(s) 12732 de 18/12/2023 contra esa empresa.

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se remite para lo pertinente copia íntegra de la(s) resolución(es) en mención, precisando que las misma quedará debidamente notificada al finalizar el día siguiente a la fecha de entrega del presente aviso en el lugar de destino.

Adicionalmente, me permito informarle que los recursos que legalmente proceden y las autoridades ante quienes deben interponerse los mismos, se relacionan a continuación:

Procede recurso de reposición ante el (la) Directora de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

NO

SI

Procede recurso de apelación ante Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

NO

SI

Procede recurso de queja ante el Superintendente de Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

NO

SI

Sin otro particular.

Atentamente,



Firmado digitalmente  
por BARRADA  
CRISTANCHO  
CAROLINA

**Carolina Barrada Cristancho**

Coordinadora Grupo de Notificaciones

Anexo: Copia Acto Administrativo (34) Folios

Proyectó: Adriana Rocio Capera Amorocho

Revisó: Carolina Barrada Cristancho

**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 12732 DE 18/12/2023**

“Por la cual se decide una investigación administrativa”

**LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  
TERRESTRE**

En ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales y, en especial las previstas en la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1079 de 2015 y las que le confiere el numeral 3 del artículo 22 del Decreto 2409 del 2018, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que, mediante **Resolución No. 1261 del 22 de abril de 2022**, se ordenó abrir investigación y se formuló pliego de cargos en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S.** con **NIT 901322006 - 4**, por la presunta vulneración a las disposiciones contenidas en el literal (c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con el artículo 2.2.1.7.5.3., los literales b) y c) del numeral 1) del artículo 2.2.1.7.6.9., y el artículo 11 de la Resolución 0377 de fecha 15 de febrero de 2013, para el **cargo primero**, por la presunta vulneración a la disposición contenidas en el artículo 93 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 17 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el parágrafo 3 del artículo 204 del Decreto 19 de 2012, para el **cargo segundo**, y por presuntamente incurrir en una injustificada cesación de los servicios, con sujeción a lo previsto en el literal b) del artículo 48 de la Ley 336 de 1996, para el **cargo tercero**.

**SEGUNDO:** Que, la resolución de apertura fue notificada por aviso publicado en página web fijado el 10/06/2022, desfijado el 16/06/2022 y notificado el 17/06/2022 según constancias que reposan en el expediente.

2.1 Teniendo en cuenta que en el **ARTÍCULO OCTAVO** de la Resolución No. 1261 del 22 de abril de 2022, se ordenó publicar el contenido de la misma.

Se tiene que, una vez vencido el término previsto, no se presentó solicitud alguna por parte de terceros interesados en la presente investigación.

2.2. En la Resolución de apertura se imputaron los siguientes cargos:

**"(...) ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S.** con **NIT 901322006-4**, por la presunta vulneración a las disposiciones contenidas en el literal (c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con el artículo 2.2.1.7.5.3., los literales b) y c) del numeral 1) del artículo 2.2.1.7.6.9., y el artículo 11 de la Resolución 0377 de fecha 15 de febrero de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

RESOLUCIÓN No. **12732** DE **18/12/2023**

**ARTÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** contra la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S.** con **NIT 901322006-4**, por la presunta vulneración a la disposición contenidas en el artículo 93 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 17 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el parágrafo 3 del artículo 204 del Decreto 19 de 2012, , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo

**ARTÍCULO TERCERO: ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR PLIEGO DE CARGOS** la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S.** con **NIT 901322006-4**, por presuntamente incurrir en una injustificada cesación de los servicios, con sujeción a lo previsto en el literal b) del artículo 48 de la Ley 336 de 1996, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.”

**TERCERO:** Una vez notificada la Resolución de apertura de investigación, la Investigada contaba con el término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo para presentar descargos, solicitar y aportar las pruebas que pretendiera hacer valer dentro del proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, el cual venció el día 13 de Julio de 2022.

**CUARTO:** Que la Investigada consultado el sistema de gestión documental de la Entidad, se observó que la Investigada no presentó descargos, dentro del término señalado por la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre en la Resolución de formulación de cargos.

**QUINTO:** Que mediante **Resolución No. 8463 del 06 de octubre de 2023**, esta Dirección ordenó la apertura del periodo probatorio, cerró el periodo probatorio y corrió traslado para alegar de conclusión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio que nos ocupa.

**SEXTO:** Que, la resolución de apertura fue notificada por aviso publicado en página web fijado el 03/11/2023, desfijado el 16/11/2023 y notificado el 17/11/2023 según constancias que reposan en el expediente.

**6.1.** Que luego de culminar la etapa probatoria y previo traslado a la Investigada por el término de diez (10) días hábiles siguientes al día de la comunicación del acto administrativo para que presentara alegatos de conclusión de conformidad con el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, termino el cual venció el día 01 de diciembre de 2023, no obstante, la Investigada no presentó los alegatos de conclusión.

**SÉPTIMO:** Que la Superintendencia de Transporte es competente para conocer la presente investigación administrativa en la medida que:

### **7.1 Competencia de la Superintendencia de Transporte**

La Superintendencia de Transporte es un organismo descentralizado del orden nacional, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal, adscrita al Ministerio de Transporte.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cfr. Decreto 2409 de 2018 artículo 3

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

El objeto de la SuperTransporte consiste en ejercer las funciones de vigilancia, inspección, y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura, cuya delegación<sup>2</sup> se concretó en (i) inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte; y (ii) vigilar, inspeccionar, y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de transporte,<sup>3</sup> sin perjuicio de las demás funciones previstas en la ley.

De otra parte, se previó que estarán sometidas a inspección, vigilancia y control de la SuperTransporte (i) las sociedades con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales que presten el servicio público de transporte; (ii) las entidades del Sistema Nacional de Transporte, establecida en la ley 105 de 1993 excepto el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las funciones que en materia de transporte legalmente les corresponden; y (iii) las demás que determinen las normas legales.

Así mismo, se dispuso que “[l]as investigaciones que hayan iniciado en vigencia del decreto 1016 de 2000, los artículos 41,43, y 44 del decreto 101 de 2002, los artículos 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del decreto 2741 de 2001 y los artículos 10 y 11 del decreto 1479 de 2014, así como lo recursos de reposición y apelación interpuestos o por interponer como consecuencia de las citadas investigaciones continuarán rigiéndose y culminarán de conformidad con el procedimiento con el cual se iniciaron”.

Finalmente, este Despacho encuentra que está dentro del término previsto en el artículo 52 de la ley 1437 de 2011 para proferir decisión de fondo.

## **7.2 Regularidad del procedimiento administrativo**

### 7.2.1 Oficiosidad

Resulta relevante en el caso señalar que la oficiosidad es la potestad que tiene el Juez, en la Impulsión y Dirección del proceso, debiendo éste tomar las medidas pertinentes para que las partes observen las formas establecidas por la Ley, y disponiendo este de los medios necesarios para la búsqueda de la verdad, incluso sin el requerimiento de las partes.

De igual manera se hace necesario tener en cuenta que en desarrollo del postulado constitucional de la efectividad de los derechos fundamentales, el juez ha de guiar el proceso a la luz del principio de oficiosidad. En tal virtud, el juez está obligado a asumir un papel activo, de impulso del proceso, con el fin de dilucidar si realmente existe la violación o la amenaza de los derechos que el peticionario invocó, o de otros, y además debe considerar si las pruebas pedidas son suficientes para resolver, y si los hechos expuestos constituyen un conjunto

<sup>2</sup>Al amparo de lo previsto en los artículos 189 numeral 22 y 365 de la Constitución Política de Colombia: “Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...) 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.” “Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.”

<sup>3</sup> Cfr. Decreto 2409 de 2018 artículo 4

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

completo, o si, por el contrario, son tan inconexos y aislados que exijan complemento informativo suficiente para que el fallador pueda formarse cabal concepto acerca del asunto objeto de su examen.

Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador tiene como finalidad mantener el orden del sistema y reprimir por medios coactivos, aquellas conductas contrarias a las políticas del ente estatal, por lo cual pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia de las acciones u omisiones que le son impuestas por el ordenamiento normativo administrativo, o el que sea aplicable por la Administración Pública en cada caso.

El procedimiento administrativo sancionador es por completo escrito, lo cual hace necesario la conformación de un expediente donde se constaten todas las actuaciones realizadas tanto por la Administración como por el sujeto investigado y mediante el cual se pueda comprobar la existencia o no del hecho atribuido, a fin de determinar la responsabilidad correspondiente.

En el caso que nos ocupa este Despacho observa que no fue necesario decretar pruebas de oficio, toda vez que las pruebas obraban en el expediente. Por lo anterior cabe resaltar lo siguiente: "Los términos procesales "constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia". Por regla general, los términos son perentorios, esto es, improrrogables y su transcurso extingue la facultad jurídica que se gozaba mientras estaban aún vigentes."<sup>4</sup>

7.2.2. Principio de legalidad de las faltas y las sanciones

Dicho lo anterior, es relevante para el presente caso hacer referencia al concepto emitido por el H. Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil el pasado 5 de marzo de 2019.<sup>5</sup> Atendiendo las consultas formuladas por el Gobierno Nacional el 24 de octubre de 2018, el H. Consejo de Estado señaló lo siguiente:

**(i)** El principio de legalidad de las faltas y las sanciones es plenamente aplicable en materia de transporte terrestre.<sup>6</sup>

**(ii)** Este principio se manifiesta en a) la reserva de ley, y b) la tipicidad de las faltas y las sanciones:<sup>7</sup>

a) Lo primero se manifiesta en que hay una reserva de ley ordinaria para tipificar conductas y sanciones administrativas.<sup>8</sup> Por lo tanto, no se admite la tipificación

<sup>4</sup> Sentencia C-102/2002 M.P Jaime Araujo Rentería.

<sup>5</sup> Número Único 11001-03-06-000-2018-00217-00. Radicación interna: 2403. Levantada la Reserva legal mediante oficio No. 115031 de fecha 20 de marzo de 2019.

<sup>6</sup> **"El principio de legalidad de las faltas y de las sanciones** previsto en el artículo 29 CP, debe observarse para establecer las infracciones administrativas y las sanciones correspondientes en todos los ámbitos regulados, dentro del contexto del Estado Regulador, **incluido por supuesto el sector del transporte terrestre.**" (negrilla fuera de texto) Cfr. Pp. 48 y 76

<sup>7</sup> "Dicho principio, como quedó expuesto, **se manifiesta en las dimensiones reserva de ley y tipicidad**". (negrilla fuera de texto) Cfr. Pp. 48 y 76

<sup>8</sup> **"La Constitución no permite otorgar a la Administración la potestad genérica de establecer vía reglamento infracciones y sanciones administrativas, pues tiene reserva de ley ordinaria,** y debe en



RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023

de conductas en reglamentos u otras normas que no tienen ese rango de ley.<sup>9-</sup>  
10

b) Lo segundo se manifiesta en que los "*elementos esenciales del tipo*" deben estar en la ley, particularmente la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción y la determinación de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma.<sup>11</sup>

(iii) Solo en la medida que se encuentren dentro de la ley esos "*elementos esenciales del tipo*", puede hacerse una complementación con decretos, resoluciones y otras disposiciones de rango infralegal.<sup>12</sup>

En efecto, el principio de legalidad "*exige que las sanciones sean comprensibles para sus destinatarios*" desde la misma ley, sin perjuicio de que se complemente con decretos y resoluciones en las materias técnicas a las que alude la regulación, dada la imposibilidad del Legislador de previsión total de las conductas sancionables.<sup>13</sup>

(iv) De esa forma, la Superintendencia de Transporte, como autoridad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar el sector transporte, debe dar aplicación en sus investigaciones administrativas a los fundamentos legales para establecer la responsabilidad y de ser procedente imponer las sanciones a sus administrados.<sup>14</sup>

En consideración de todo lo anterior, este Despacho encuentra que respecto de los dos cargos formulados, la formulación jurídica realizada en la resolución de apertura se estructuraron con fundamento en normas de rango legal<sup>15</sup>. Por lo

---

todo caso respetar el debido proceso en punto a la legalidad y a la tipicidad, de conformidad con el inciso 2 del artículo 29 de la Carta Política." Cfr. Pp. 49 y 77

<sup>9</sup> "(...) no es posible predicar lo mismo en cuanto a la remisión efectuada a las normas reglamentarias, puesto que ello supone que el ejecutivo quede investido de manera permanente para establecer infracciones mediante la expedición de actos administrativos de carácter general." Cfr. Pp. 38

<sup>10</sup> **"La Constitución no permite otorgar a la Administración la potestad genérica de establecer vía reglamento infracciones y sanciones administrativas, pues tiene reserva de ley ordinaria, y debe en todo caso respetar el debido proceso en punto a la legalidad y a la tipicidad, de conformidad con el inciso 2 del artículo 29 de la Carta Política." Cfr. Pp. 49 y 77**"(...) **no es constitucionalmente admisible 'delegar' en otra autoridad estatal la competencia de determinar las infracciones y las sanciones, toda vez que es exclusiva del Legislador**, con lo cual se reafirma el principio de reserva de ley en materia sancionatoria administrativa bajo los criterios expuestos en este concepto, así como la formulación básica del principio de tipicidad". Cfr. Pg. 19

<sup>11</sup> "(...) las sanciones deben contar con un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser transferida al Gobierno Nacional a través de una facultad abierta sin contar con un marco de referencia específico y determinado (...) **Al legislador no le está permitido delegar en el ejecutivo la creación de prohibiciones en materia sancionatoria, salvo que la ley establezca los elementos esenciales del tipo, estos son:** (i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) la autoridad competente para aplicarla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposición." Cfr. Pp. 14 y 32

<sup>12</sup> "No son admisibles formulaciones abiertas, que pongan la definición de la infracción o de la sanción prevista en la ley en manos de la autoridad administrativa. **En cuanto a la posibilidad del reenvío normativo a decretos reglamentarios, corresponde al legislador delimitar el contenido de la sanción a través de la configuración de los elementos estructurales del tipo**, por lo que la remisión a la norma reglamentaria debe permitir su cumplida ejecución. En tales casos, el contenido de la ley estará referido al núcleo esencial de la materia reservada, de manera que el reglamento se limite a desarrollar, complementar y precisar lo que ya ha sido de manera expresa contemplado en la ley. Es aquí donde el reglamento cumple una función de "colaboración" o complementariedad." Cfr. Pp. 42, 49 y 77

<sup>13</sup> Cfr. Pp. 19 a 21

<sup>14</sup> "En lo atinente al principio de tipicidad, (...) **lo que se exige es un fundamento legal en donde se señalen los elementos básicos de la sanción**, marco dentro del cual la autoridad titular de la función administrativa pueda precisar, **los elementos de la sanción que haya de ser aplicada por otra autoridad**, no por ella misma." Cfr. Pg. 19

<sup>15</sup> *Ibidem*

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

tanto, será respecto de dichos cargos que se hará a continuación el juicio de responsabilidad administrativa.

En esta etapa, el Despacho encuentra que se han respetado las "garantías mínimas previas", en la medida que la actuación (i) ha sido tramitada por la autoridad competente; (ii) se ha notificado o comunicado al Investigado, según el caso, sobre las actuaciones propias del proceso en los términos previstos en la ley; (iii) se concedió al Investigado la oportunidad para expresar libre y abiertamente sus opiniones y argumentos; (iv) se concedió al Investigado la oportunidad para contradecir o debatir los cargos formulado en su contra, tanto en descargos como en alegatos de conclusión.<sup>16</sup>

Asimismo, se han respetado los derechos y garantías del Investigado en la etapa probatoria, en la medida que (i) se concedió al Investigado la oportunidad para presentar y solicitar pruebas; (ii) se concedió al Investigado la oportunidad para controvertir las que obran en su contra; y (iii) se respetó el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, su práctica observando las reglas del debido proceso.<sup>17</sup>

Así entonces, encuentra este Despacho que tanto en la averiguación preliminar<sup>18</sup> como en la investigación misma, se ha garantizado el debido proceso al Investigado.<sup>19</sup>

Finalmente, este Despacho encuentra que está dentro del término previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 para proferir decisión de fondo.

**OCTAVO:** Encontrando que la actuación se ha adelantado con respeto de los derechos y garantías Constitucionales y legales, se procede a resolver la investigación en los siguientes términos:<sup>20</sup>

### **8.1 Sujeto investigado**

Se previó en la ley 1437 de 2011 que "[e]l acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener (...) La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar".<sup>21</sup>

Tal como aparece al inicio de esta resolución, el sujeto investigado **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S.** con **NIT 901322006 - 4,**

<sup>16</sup> Cfr. H. Corte Constitucional Sentencia C-315 de 2012

<sup>17</sup> "a) el derecho para presentarlas y solicitarlas; b) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; c) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; d) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; e) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos; y f) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso". Cfr. H. Corte Constitucional Sentencia C-203 de 2011. A ese mismo respecto ver: H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil siete (2007) Radicación número: 25000-23-26-000-1995-01143-01(14850)

<sup>18</sup> Esta averiguación preliminar corresponde a una fase previa a la investigación formal, en la que no se han vinculado formalmente partes o investigados, no existen supuestos de hecho ni imputación en contra de ninguna persona: "(...) la averiguación preliminar no está sujeta a formalidad alguna, y su única finalidad es la de permitirle al ente de control contar con la información necesaria para establecer si se debe o no abrir una investigación administrativa, (...) ésta no es una etapa obligatoria del procedimiento sancionatorio, como sí lo son la investigación (apertura, notificación y práctica de pruebas)". Cfr. Ley 1437 de 2011 artículo 47. H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Sentencia de enero 23 de 2003. CP Manuel Urueta Ayola. Rad. 25000- 23-24-000-2000-0665-01

<sup>19</sup> Cfr. Constitución Política de Colombia artículo 29. Ley 1437 de 2011 artículo 3.

<sup>20</sup> Cfr. Ley 336 de 1996 artículo 51, concordante con el artículo 49 de la ley 1437 de 2011.

<sup>21</sup> Cfr. Ley 1437 de 2011 artículo 49 numeral 1.



**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

corresponde al sujeto a quien se le abrió investigación administrativa objeto de la presente decisión.

## **8.2 Marco normativo**

A continuación, se procede a exponer las disposiciones que fueron imputadas al Investigado en la Resolución de apertura, así como su contenido normativo.

### **"(...) 11.1. Imputación fáctica y jurídica.**

*De conformidad con lo expuesto por esta Dirección en la parte considerativa del presente acto administrativo, es posible establecer del material probatorio que SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S. (i) presuntamente incumplió la obligación de suministrar la información legalmente solicitada al no expedir y remitir en línea y en tiempo real, la información de los manifiestos de carga y remesas a la plataforma del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), conducta descrita en el literal c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, (ii) presuntamente incumplió con su obligación de remitir los programas de control y seguimiento a las infracciones de tránsito de los conductores a través de la plataforma VIGIA de conformidad con lo previsto en el parágrafo 3º del artículo 93 de la Ley 769 de 2002 y, (iii) presuntamente estaría incurriendo en una cesación injustificada de actividades, conducta descrita en el literal b) del artículo 48 de la Ley 336 de 1996.*

*Lo anterior, encuentran fundamento en lo expuesto en el considerando décimo del presente acto administrativo, de acuerdo con la información reportada por la Dirección de Promoción y Prevención y las consultas realizadas por esta Dirección de Investigación de Tránsito y Transporte Terrestre al RNDC y Sistema VIGIA.*

*Así las cosas, se puede concluir que con las actuaciones ejecutadas por la Investigada, presuntamente transgredió la normatividad vigente en lo que respecta a las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de carga.*

### **11.2. Cargos.**

**CARGO PRIMERO:** *Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S. con NIT 901322006-4 presuntamente incumplió la obligación de suministrar la información legalmente solicitada al no expedir y remitir en línea y en tiempo real, la información de los manifiestos electrónicos de carga y remesas a la plataforma del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), de las operaciones de transporte realizadas durante el 01 de enero de 2010 al 30 de junio de 2021.*

*Con fundamento en lo descrito anteriormente la empresa presuntamente transgrede lo dispuesto en el literal (c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con el artículo 2.2.1.7.5.3, literal b) y c) del artículo 2.2.1.7.6.9 del Decreto 1079 de 2015 y el artículo 11 de la Resolución 0377 de fecha 15 de febrero de 2013. (...)*

**CARGO SEGUNDO:** *Del material probatorio recaudado en esta actuación administrativa, se evidencia que SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S. con NIT 901322006-4, presuntamente incumplió con su obligación de enviar los programas de control y seguimiento a las infracciones de tránsito de los conductores a través de la plataforma VIGIA durante el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.*

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

*Con fundamento en lo descrito anteriormente es posible concluir que el comportamiento de la sociedad presuntamente constituye una transgresión a lo dispuesto en el párrafo 3° del artículo 93 de la Ley 769 de 2002. (...)*

**CARGO TERCERO:** *Del material probatorio recabado en la presente actuación administrativa y, en particular, lo dispuesto en el considerando 10.3., se evidencia que SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S. con NIT 901322006-4, presuntamente estaría incurriendo en una cesación injustificada de actividades, al no expedir y remitir los manifiestos de carga y remesas a través del RNDC y no enviar mensualmente la información requerida por esta superintendencia a través de la plataforma VIGIA durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021.*

*Con fundamento en lo descrito anteriormente es posible concluir que el comportamiento de la sociedad presuntamente se adecúa al supuesto de hecho descrito en el literal b) del artículo 48 de la ley 336 de 1996, para dar lugar a la cancelación de la habilitación." (...)*

### **8.2.1 Finalidad de las actuaciones administrativas en materia de transporte de carga**

El transporte de carga cobra relevancia frente a los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política, principalmente por dos razones:

De un lado, en la medida que la actividad de conducir es considerado una actividad peligrosa respecto de la cual se justifican controles para evitar la lesión de otros usuarios de la vía. Al respecto, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y de la Corte Constitucional se ha señalado sistemáticamente que "(i) la actividad de conducir un vehículo automotor no es un derecho; (ii) la actividad de conducir un vehículo automotor es una actividad peligrosa que pone en riesgo la vida de quienes conducen, de los demás conductores y de los peatones (...); la actividad de conducir vehículos automotores, ha sido considerada por la jurisprudencia constitucional como por la especializada en la materia, una actividad peligrosa que coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de recibir lesión".

En esa medida, se han impuesto requisitos y controles sobre los vehículos, conductores y otros sujetos que intervienen en la actividad de transporte de carga, que tienden a mitigar los factores de riesgo en esa actividad, a la vez que se han impuesto unas obligaciones y deberes a los prestadores de servicio público, puesto que "quien se vincula a ese tipo de actividades participa en la creación del riesgo que la misma entraña y, por lo tanto, tiene la obligación de extremar las medidas de seguridad, para evitar la causación de daños a otros y a sí mismos".

De otro lado, porque el transporte terrestre de mercancías tiene una particular relevancia para el desarrollo económico y en la competitividad del país. - De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del año 2018-2019, en Colombia se realizan recorridos del orden de los 72.000 km/año/vehículo, comparado con países con condiciones similares, como Argentina (116.000 km/año/vehículo), Chile (110.000 km/año/vehículo) o México (108.000 km/año/vehículo).

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

Esta actividad tan importante para el país se ha visto afectada por múltiples problemas, incluyendo la informalidad: el Consejo Privado de Competitividad señaló en el Informe Técnico del año 2017- 2018, que una de las afectaciones al desempeño logístico del transporte de carga del país se origina en la informalidad del transporte por carretera.

De ahí, la importancia de la rigurosidad en la inspección, vigilancia y control ejercida por el Estado, con la colaboración y participación de todas las personas. A ese respecto, se previó en la ley que las autoridades controlarán la adecuada prestación del servicio, en condiciones de eficiencia, calidad, oportunidad y seguridad. Asimismo, en el decreto 2409 de 2018 se señaló que la Superintendencia de Transporte “velará por el libre acceso, seguridad y legalidad, en aras de contribuir a una logística eficiente del sector”.

Luego, la inspección, vigilancia y control de la movilización de cosas, contribuye con el fortalecimiento estratégico del sector para la debida prestación del servicio público esencial de transporte y los servicios afines en la cadena logística.

### **8.2.2. Cargas probatorias**

En la Constitución Política y en la legislación se previeron unas reglas probatorias, como se pasa a explicar:

(i) En primer lugar, la Corte Constitucional ha señalado que la presunción de inocencia “se constituye en regla básica sobre la carga de la prueba”.

Al respecto, se previó en la Constitución Política que “[e]l debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. [...] Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. El anterior precepto fue desarrollado en la ley 1437 de 2011, así: “[e]n virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. [...] las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.”

Así, la Corte señaló que “corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una persona es responsable (...) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica”.

(ii) De otro lado, en la legislación procesal se previó que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”

RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023

La doctrina, al explicar la función de la carga de la prueba, coincide en que permite al juzgador saber el sentido de su fallo, cuando quien tenía el deber de probar no pudo hacerlo o es insuficiente. Explica Jairo Parra Quijano que “[e]s una regla que le crea a las partes una auto responsabilidad para que acredite los hechos que sirven de supuesto a las normas jurídicas cuya aplicación reclama y que, además le indica al juez como debe fallar cuando no aparecen probados tales hechos”.

En el mismo sentido, Jorge Peyrano precisa que “[l]a regla de la carga de la prueba es más bien una regla de juicio que una regla de prueba, poniéndose de manifiesto su real importancia cuando no concurre prueba o ella es insuficiente, porque en tal caso se debe fallar contra la parte que corría el riesgo de no probar. Más que distribuir la prueba, reparte las consecuencias de la falta de prueba o certeza, y las normas que lo regulan son de naturaleza procesal”.

En ese contexto, este Despacho considera el umbral probatorio para sancionar debe superar la duda razonable, siendo entonces superior al umbral que se requiere para simplemente abrir una investigación.

### 8.3 El caso concreto

Se previó en la ley 1437 de 2011 que “[e]l acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener (...) 2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción. 3. Las normas infringidas con los hechos probados. (...)”.<sup>22</sup>

Así, con respeto del principio de necesidad de la prueba<sup>23</sup> conforme al cual “no existe ninguna libertad para que el funcionario decida con base en pruebas o circunstancias que no obren en el proceso”,<sup>24</sup> el Despacho procederá a apreciar y valorar las pruebas allegadas oportuna y regularmente al proceso bajo las reglas de la sana crítica.<sup>25</sup>

#### **8.3.1. Respecto del cargo primero por presuntamente incumplir la obligación de suministrar la información solicitada al no expedir y remitir en línea y en tiempo real, la información de los manifiestos electrónicos de carga a la plataforma del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) correspondiente a las operaciones de despachos de carga realizadas durante enero de 2010 al 30 de junio de 2021.**

En la resolución de apertura, se imputó al Investigado el presente cargo por presuntamente no expedir y remitir en línea y tiempo real a través del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) la información de los manifiestos

<sup>22</sup> Cfr. Ley 1437 de 2011 artículo 49 numeral 2 y 3.

<sup>23</sup> “Artículo 164. Necesidad de la Prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho.” Cfr. Código General del Proceso artículo 164.

<sup>24</sup> Cfr. PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Ed. Librería del Profesional. Bogotá D.C. 2002 pp. 63-64.

<sup>25</sup> “Artículo 176. Apreciación de las Pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.” Cfr. Código General del Proceso artículo 176.

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

electrónicos de carga, correspondiente a las operaciones de despachos de carga realizadas durante 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, infringiendo lo establecido en el literal c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con el artículo 2.2.1.7.5.3., literales b) y c) del numeral 1) del artículo 2.2.1.7.6.9. del Decreto 1079 de 2015 y artículo 11 de la Resolución 377 de 2013, del cual se extraen los siguientes supuestos de hecho.

- (i) Suministrar la información que legalmente le haya sido solicitada**
- (ii) Expedir el manifiesto electrónico de carga, de manera completa en los términos previstos por el Ministerio de Transporte**
- (iii) Remitir al Ministerio de Transporte el manifiesto electrónico de carga, en los términos y por los medios que este defina**
- (iv) Las empresas de transporte de servicio público de transporte terrestre automotor de carga utilizaran de forma obligatoria el Registro Nacional de Despachos de Carga**

Es menester mencionar la relevancia del objeto y el concepto de la herramienta del Registro Nacional de Despachos de Carga, la cual se define como el "sistema de información que permite recibir, validar y transmitir la información generada en las operaciones de Servicio Público de Transporte de Carga por Carretera, de esta manera el Ministerio de Transporte cuenta con un instrumento idóneo para garantizar la transparencia y la formalidad que requiere el país y los actores del sector que prestan el Servicio Público de Transporte de Carga. Este instrumento es un elemento crucial de la política de transporte pues equilibra los intereses de los distintos actores del proceso. El RNDC, es el medio para registrar los datos de la actividad transportadora de carga terrestre, y además evidencia la evolución de la información de esta operación. Informa a las entidades del Estado encabezadas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, a fin de que puedan ejercer sus actividades de control y planificación"<sup>26</sup>.

Como se puede observar el RNDC es un instrumento de trascendental importancia en el desarrollo de la actividad del transporte, ya que permite un mayor control no solo en las relaciones económicas de las partes intervinientes en la misma, sino también en la inspección, control y vigilancia por parte de las distintas entidades del estado en virtud del monitoreo y cumplimiento de la política de libertad vigilada, la adecuada prestación del servicio en condiciones de calidad oportunidad y seguridad, esto en desarrollo de la función de policía administrativa que les es propia y cuya finalidad se materializa en la regulación del orden social frente a posibles acciones que pongan en peligro distintos bienes jurídicos, permitiendo la materialización del control sobre la información de las empresas de transporte, la configuración de los vehículos utilizados para el transporte de carga, los recorridos entre el origen y el destino y el correspondiente valor a pagar, que puede afectar directamente aquellos actores involucrados en el desarrollo del servicio público de transporte.

Con fundamento en lo anterior, este Despacho concluye que el Investigado no infringió lo establecido en el literal c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con el artículo 2.2.1.7.5.3., literales b) y c) del numeral 1) del

---

<sup>26</sup> Ministerio de Transporte, Registro Nacional de Despacho de Carga RNDC / Manual de Usuario Web V2.0.docx



RESOLUCIÓN No. **12732** DE **18/12/2023**

artículo 2.2.1.7.6.9. del Decreto 1079 de 2015 y artículo 11 de la Resolución 377 de 2013, a partir de los siguientes hechos probados:

- (i) Conforme a los resultados de la auditoría interna practicada por la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, con la finalidad de verificar las empresas hayan enviado el Programa de Control y Seguimiento a las Infracciones al Tránsito de los conductores, a través de este sistema De la consulta realizada al aplicativo VIGIA esta Dirección pudo identificar dentro del listado de empresas que presuntamente no enviaron el Programa de Control y Seguimiento a las Infracciones al Tránsito de los conductores a la empresa **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S. con NIT 901322006 - 4**
- (ii) Es así como, el día 05 de abril de 2022, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte realizó la consulta en la página web del RNDC en el módulo de "manifiestos de carga", en la cual se utilizó como criterios de búsqueda (i) código 3975 que identifica a la empresa investigada y (ii) periodo a consultar 01/01/2020 a 30/06/2021.
- (iii) De la citada inspección virtual, se evidenció que la empresa durante el periodo objeto de investigación no había expedido y remitido en línea y en tiempo real la información de los manifiestos de carga a la plataforma del RNDC, en virtud de las operaciones de transporte realizadas como consecuencia de la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, lo que inició la presente investigación administrativa.
- (iv) Iniciada la investigación, la Supertransporte en aras de garantizar al investigado el derecho a la defensa y contradicción corrió traslado para que presentara escrito de descargos contra los cargos formulados; empero, la investigada no los presentó

Así las cosas, se realizó la consulta a la plataforma tecnológica RNDC, en el que se pudo corroborar que la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S. con NIT 901322006 - 4**, no se encuentra cumpliendo con las obligaciones propias derivadas de la habilitación concedida mediante Resolución No. 477 del 15 de octubre de 2019, circunstancia que permite establecer que la misma no se encuentra prestando el servicio público de transporte.

Por lo tanto, se considera que el no prestar el referido servicio público de transporte de carga en los términos y condiciones establecidas en la habilitación para el ejercicio de la actividad transportadora, concluye en una imposibilidad fáctica de cumplir con la obligación contenida en el ordenamiento jurídico, al exigir a una empresa que no está en funcionamiento que expida y remita a través del RNDC los manifiestos electrónicos de carga.

En consecuencia, este Despacho considera procedente, conforme a los planteamientos argüidos, resolver favorablemente de la conducta endilgada en el presente cargo a la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S. con NIT 901322006 - 4**, al concluir que la sociedad no se encuentra desarrollando operaciones de transporte de carga y en consecuencia no se genera la obligación de expedición y reporte de los manifiestos de carga ante la plataforma del Registro Nacional de Despachos de Carga RNDC.



RESOLUCIÓN No. **12732** DE **18/12/2023**

Conforme lo expuesto, esta Superintendencia **EXONERA** de responsabilidad a la empresa investigada frente al **CARGO PRIMERO**.

**8.3.2 Respecto del cargo segundo por presuntamente incumplir la obligación de enviar los programas de control y seguimiento a las infracciones de tránsito de los conductores a través de la plataforma VIGÍA.**

En la resolución de apertura, se imputó al Investigado el presente cargo por presuntamente no enviar los programas de control y seguimiento a las infracciones de tránsito de los conductores a través de la plataforma VIGIA, teniendo en cuenta, que realizada la consulta al aplicativo por parte de esta Dirección, se evidenció que la empresa no estaba registrada, infringiendo lo establecido en lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 93 de la ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010 y el Decreto 019 de 2012, cumpliendo con los siguientes supuestos de hecho:

- (i) **Enviar mensualmente el Programa de Control y Seguimiento a las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio a la "Superintendencia de Puertos y Transporte". (Sic)**

Para el análisis del presente caso, es necesario recordar al investigado que la actividad de conducir vehículos automotores se ha considerado como una actividad riesgosa, que rompe el equilibrio que debe existir entre los asociados y que como tal coloca per se a la comunidad "ante inminente peligro de recibir lesión". Es por ello, que, en garantía de la seguridad, como principio fundamental del transporte, se estableció como obligación para las empresas implementar un programa de control y seguimiento a las infracciones de tránsito de los conductores de los equipos a través de los cuales se realizan las operaciones de transporte, con el fin de mitigar y prevenir el riesgo.

Por lo tanto, el carácter riesgoso justifica que esta actividad pueda ser regulada de manera intensa por el Legislador, quien puede señalar reglas y requisitos destinados a proteger la integridad de las personas y los bienes. Por ello, la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, a su vez modificada por el Decreto 019 de 2012, establece:

**"ARTICULO 204. CONTROL DE INFRACCIONES DE CONDUCTORES.**

*El artículo 93 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 17 de la Ley 1383 de 2010, quedará así:*

**Artículo 93.** *Control de Infracciones de Conductores.*

**"Parágrafo 3°.** *Las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las empresas de transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Las empresas que no cumplan con lo antes indicado serán sancionadas por dicha entidad con una multa equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smmlv)."*

De la misma manera, la Superintendencia de Tránsito y Transporte Terrestre en ejercicio de las funciones de Vigilancia, Inspección y Control asignadas en virtud

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

al Decreto 2409 de 2018, a través de la Circular Externa N° 014 del 15 de julio de 2014 y subrogada por la Resolución No. 15681 de fecha 03 de mayo de 2017, recordó a las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor en las distintas modalidades dar estricto cumplimiento a las obligaciones previstas en la normatividad arriba aludida, señalando además que:

- (i) *"Las empresas de transporte de pasajeros por carretera, carga, especial y mixto, que a partir del veintiocho (28) de julio del presente año, se habilitará el sistema VIGIA de esta Superintendencia, para empezar a ingresar la información de los registros relacionados con el Programa de Control y Seguimiento a las Infracciones de Tránsito de los Conductores."*
- (ii) *"Las empresas deberán estar sujetas a ingresar la totalidad de la información en forma mensual es decir la correspondiente al mes de julio, se recibirá hasta el diez (10) de agosto del presente año y así sucesivamente cada mes, el cual se deberá enviar durante los primeros diez (10) días, la información del mes anterior."*

En este sentir, es de señalar que la norma contempla dos obligaciones, la primera es establecer un programa de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores y la segunda es reportar dicha información a través del Sistema Nacional de Supervisión VIGIA, dentro del término establecido para ello.

Cabe resaltar que, la obligación de reporte persiste aun cuando las empresas de transporte presten el servicio en el radio de acción, nacional, intermunicipal y/o municipal; se cometan o no infracciones de tránsito por parte de los conductores vinculados a la empresa, o aun cuando ésta no se encuentre realizando operaciones de transporte. Esto último, atiende al marco de la diligencia que es esperable de las empresas de transporte de carga en su rol de profesionales en el ramo y, concretamente, de la actividad que se desarrolla, la cual se encuentra enmarcada como un servicio público.

Así las cosas, este Despacho concluye que el Investigado infringió el parágrafo 3 del artículo 93 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010 y el Decreto 019 de 2012, a partir de los siguientes hechos probados:

- (i) En la Resolución de Apertura No. 1261 del 22 de abril de 2022, se registró, que una vez consultado el aplicativo "VIGIA", se evidenció que la empresa no ha reportado información, y por lo tanto, se constata que no envía mensualmente a la Superintendencia de Transporte lo correspondiente al programa de control y seguimiento a las infracciones de tránsito.
- (ii) La Supertransporte en aras de garantizar el derecho a la defensa a la empresa investigada, corrió traslado para que presentara descargos y alegatos de conclusión, sin embargo, la empresa no ejerció el derecho que le asiste, razón por la cual, se tomaron como únicas pruebas las obrantes en el plenario, con lo que se concluye que no fue desvirtuado el acervo probatorio obrante en el expediente.

De conformidad con lo anterior, el 04 de diciembre de 2023, esta dirección procedió a consultar el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte – VIGIA, en el módulo de "vigilado", en la que se evidenció que la empresa aún no ha reportado información en el aplicativo, tal como se demuestra a continuación:



Por otra parte, la norma preside que el sujeto para el cual se encuentra dirigido la obligación de establecer y reportar el Programa de Control y Seguimiento a las Infracciones, es para toda empresa de transporte público terrestre automotor, sin importar su modalidad. Cabe agregar, que la empresa Investigada, mediante Resolución No. 477 del 15 de octubre de 2019 expedida por el Ministerio de Transporte, fue habilitada para operar en la modalidad de Carga, es por ello, que tiene la obligación de reportar mensualmente la información al programa de Control y Seguimiento a las infracciones de tránsito de sus conductores.

Con base en todo lo anterior, este Despacho encuentra suficientemente **PROBADA LA RESPONSABILIDAD** por parte del Investigado, para el **CARGO SEGUNDO**, motivo por el cual se impondrá una sanción al mismo.

### **8.3.3 Respecto del cargo tercer por presuntamente estar incurriendo en una cesación injustificada de actividades**

En la resolución de apertura, se imputó al Investigado el presente cargo por presuntamente incurrir en una cesación injustificada de actividades, infringiendo lo establecido en el artículo 48 literal b) de la Ley 336 de 1996, del cual se extrae que hay lugar a la cancelación de las licencias, registros habilitaciones o permisos de operación de las empresas cumpliendo con los siguientes supuestos de hecho:

**(i) injustificada cesación de actividades o de los servicios autorizados por parte de la empresa transportadora**

Sobre el particular, se pone de presente a la investigada que el transporte "Es una actividad indispensable para la vida en sociedad y en particular para las relaciones económicas, que conlleva movilizar personas o cosas de un lugar a otro, mediante diferentes medios. Dichos traslados pueden efectuarse dentro del marco de las relaciones privadas, bajo el amparo de la libertad de locomoción (art. 24 Const.), o ejerciendo actividades económicas dirigidas a obtener

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

beneficios por la prestación del servicio (art. 333)<sup>27</sup>". Actividad que tiene unas características esenciales y fundamentales, tales como:

*"(...) Su objeto consiste en movilizar personas o cosas de un lugar a otro, a cambio a una contraprestación pactada normalmente en dinero. ii) Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la comunidad, mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre competencia; iii) El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía de su prestación - la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida -, y la seguridad de los usuarios - que constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte ( ley 336/96, art. 2º). iv) Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención del Estado; v) El servicio público se presta a través de empresas organizadas para ese fin y habilitadas por el Estado. vi) Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, ya sea con vehículos propios o de terceros, para lo cual la ley defiere al reglamento la determinación de la forma de vinculación de los equipos a las empresas ( ley 336/96, art. 22); vii) Su prestación sólo puede hacerse con equipos matriculados o registrados para dicho servicio; viii) Implica necesariamente la celebración de un contrato de transporte entre la empresa y el usuario. ix) Cuando los equipos de transporte no son de propiedad de la empresa, deben incorporarse a su parque automotor, a través de una forma contractual válida. (...)"<sup>28</sup> "*

Ahora bien, es importante resaltar que la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte, debe entenderse como el requisito "sine qua non" para realizar operaciones enmarcadas dentro del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga, el cual debe operar de forma eficiente, segura, oportuna y económica, cumpliendo con los principios rectores del transporte como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, de esta manera la habilitación de transporte público en la modalidad de carga debe ejecutarse conforme a los principios, términos y condiciones que la autoridad correspondiente imponga, entre estos "la garantía de su prestación la cual debe ser óptima, eficiente, continua e interrumpida"<sup>29</sup>, so pena de configurarse una cancelación de la misma; pues tal como lo ha dicho la Corte Constitucional:

*"(...) No puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiendo como tales — lo ha dicho la Corte — aquellos que "se entienden incorporados válidamente y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad" (Sentencia C- 043 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)*

*Lo anterior encuentra respaldo constitucional en los principios fundamentales y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (Arts. 1º, 2º, y 366 de la Constitución Política de Colombia)*

Teniendo como fundamento el reporte realizado por la Dirección de Promoción y Prevención<sup>34</sup>, la consulta realizada en la plataforma del RNDC<sup>30</sup> y, en el

<sup>27</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-033/14 M.P. NILSON PINILLA PINILLA

<sup>28</sup> Ibidem

<sup>29</sup> Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de mayo de 2006.

<sup>30</sup> Ministerio de Transporte. Consulta manifiestos de carga

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

aplicativo VIGÍA<sup>31</sup> a través de los cuales se determinó que el investigado presuntamente se encuentra en una injustificada cesación de actividades, para el análisis correspondiente, este Despacho concluye que el Investigado incurrió en la conducta del literal b) del artículo 48 de la ley 336 de 1996, a partir de los siguientes hechos probados:

- (i) Conforme a los resultados de la auditoría interna practicada, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, consultó la plataforma del Sistema Nacional de Supervisión al Transporte VIGIA, con la finalidad de verificar que las empresas que fueron relacionadas por la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre, hayan enviado el Programa de Control y Seguimiento a las Infracciones al Tránsito de los conductores, esta Dirección pudo identificar dentro del listado de empresas que presuntamente no enviaron el Programa de Control y Seguimiento a las Infracciones al Tránsito de los conductores, a través del aplicativo, a la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga, **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S. con NIT 901322006 - 4**
- (ii) Es así como, 22 de octubre de 2021, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte realizó la consulta en la página web del RNDNC en el módulo de "manifiestos de carga", en la cual se utilizó como criterios de búsqueda (i) código 0075 que identifica a la empresa investigada (ii) periodo a consultar 01/01/2019 a 31/12/2020, es decir, que la empresa no presenta información registrada a través Registro Nacional de Despachos de Carga RNDNC para las vigencias 2019 a 2020.
- (iii) Una vez verificado el aplicativo VIGIA, se logró determinar que, a la fecha del presente acto administrativo, la empresa aún no se encuentra registrada y por lo tanto no es posible realizar las entregas correspondientes, al control y seguimiento de infracciones de tránsito de los conductores.
- (iv) La Supertransporte en aras de garantizar el derecho a la defensa a la empresa investigada, corrió traslado para que presentara escrito de descargos contra los cargos formulados, como para alegar de conclusión, sin embargo, la empresa no ejerció el derecho que le asiste, razón por la cual, se tomaran como únicas pruebas las obrantes en el plenario.

En consecuencia, la empresa carga **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S. con NIT 901322006 - 4**, no desarrolla operaciones de transporte, ni está desarrollando el fin esencial de su habilitación, es decir, los servicios de transporte por los cuales fue habilitada mediante Resolución No. 446 del 16 de noviembre de 2001, lo cual indica que se encuentra incurso en la sanción contenida en el literal b) del artículo 48 de la ley 336 de 1996 referente a la cancelación de las licencias, registros, habilitaciones o permisos de operación.

Así las cosas, teniendo en cuenta lo expuesto, este Despacho encuentra suficientemente **PROBADA LA RESPONSABILIDAD** por parte del Investigado, para el **CARGO TERCERO** motivo por el cual se impondrá una sanción al mismo.

---

<sup>31</sup> Sistema Nacional de Supervisión al Transporte VIGIA. Consulta Modulo Vigilado.



RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023

**8.3.2. Respecto del cargo segundo por presuntamente efectuar descuentos no autorizados al valor a pagar pactado con los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos de transporte público de carga, de los cuatro (4) vehículos amparados mediante los manifiestos de carga relacionados.**

En la resolución de apertura se imputó al Investigado el presente cargo por presuntamente efectuar descuentos no autorizados al valor a pagar pactado con los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos de transporte público de carga, de los vehículos amparados mediante los manifiestos de carga relacionados en la cuadro No. 1 de la resolución de apertura, infringiendo lo establecido en el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con el inciso primero del artículo 9 de la Ley 105 de 1993, por el desconocimiento de lo previsto en los artículos 2.2.1.7.6.7 y numeral 1, literal f) del artículo 2.2.1.7.6.9. del Decreto 1079 de 2015, con sujeción a lo establecido en los artículos 983 y 984 del Código de Comercio, del cual se extraen los siguientes supuestos de hecho.

- (i) **Los únicos descuentos que podrá efectuar la empresa de transporte al valor a pagar pactado al propietario, poseedor o tenedor del vehículo del servicio público de transporte terrestre automotor de carga serán los derivados en la retención en la fuente por concepto de renta y del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros -ICA.**
- (ii) **Es obligación de las empresas de transporte efectuar al propietario, poseedor o tenedor del vehículo, única y exclusivamente los descuentos contemplados en el Decreto 1079 de 2015.**

Frente al particular este Despacho se sirve manifestar que mediante el Decreto 2092 de 2011 compilado por el Decreto 1079 de 2015 se establecieron las relaciones económicas entre los actores del transporte, en particular entre las empresas de transporte legalmente habilitadas y constituidas y los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos de carga. Relación que genera a favor de este último actor el reconocimiento del valor a pagar<sup>32</sup>.

En razón a las relaciones económicas establecidas mediante el Decreto 2092 de 2011, fue establecido mediante el artículo 10 del mismo Decreto que los **ÚNICOS** descuentos autorizados que podrán efectuarse por parte de la empresa de transporte al propietario, poseedor o tenedor del vehículo serán los derivados en la **retención en la fuente por concepto de renta y del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros ICA**, descuentos que fueron señalados de forma previa a las operaciones de carga bajo estudio las cuales hoy hacen parte del Decreto Único Compilerio del Sector Transporte 1079 de 2015 en el artículo 2.2.1.7.6.7. el cual consagra:

**"Artículo 2.2.1.7.6.7. Descuentos.** Al valor a Pagar pactado, los **únicos descuentos** que podrán efectuarse por parte de la empresa de transporte al propietario, poseedor o tenedor del vehículo del servicio público de transporte

<sup>32</sup> Es el valor a pagar establecido entre la empresa de transporte y el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de carga, teniendo en cuenta los costos eficientes de operación establecidos en el sistema de información de costos de referencia adoptado por el Ministerio de Transporte. Artículo 1 del Decreto 2092 de 2011.



RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023

*terrestre automotor de carga, serán los derivados en la retención en la fuente por concepto de renta y del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros -ICA.*" (Negrilla fuera del texto)

Dicha norma actúa como un limitante de la voluntad contractual de las partes, estableciendo un límite claro a las potestades o facultades con que cuentan las empresas transportadoras en virtud de la relación contractual que tienen con los propietarios/poseedores o tenedores de los vehículos que vinculan en virtud del cumplimiento de su objeto social el cual se debe ajustar al marco de la intervención del Estado y la libertad económica en materia de servicios públicos.

Ahora bien, es pertinente manifestar que este Despacho se ciñe a los postulados constitucionales reconocidos y señalados por el tribunal constitucional, por lo cual se permite traer a colación la definición del principio de la autonomía de la voluntad privada y determinar que este no es absoluto y que en el marco de intervención del Estado y la limitación a la libertad económica esta tiene un alcance que obedece a fines constitucionales mayores. Así las cosas, se llama la atención sobre el particular, poniendo de presente que mediante providencia C 1194 de 2008 fue definida la autonomía de la voluntad así:

*(...) "El principio de autonomía de la voluntad privada ha sido definido como el poder de las personas, reconocido por el ordenamiento positivo para disponer con efecto vinculante de los intereses y derechos de los que son titulares y por ende crear derechos y obligaciones, siempre que respete el orden público y las buenas costumbres". (...)*

De otro lado esta Alta Corte sostuvo en la misma providencia que:

*(...) "Ahora bien, el principio de autonomía de la voluntad privada en el marco del Estado colombiano debe ser interpretado conforme con los principios, valores y derechos reconocidos por la Carta y propios del Estado Social de Derecho, lo cual significa que el postulado, como ya se señaló, no tiene una connotación absoluta, y por tanto admite excepciones, relacionadas entre otras, con la realización de la justicia y el respeto de los derechos fundamentales." (...)*

*(...) "Finalmente debe precisar la Corte que, este principio encuentra consagración legal en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual "[t]odo contrato legalmente celebrado es una Ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales" en concordancia con el artículo 16 del mismo ordenamiento, el cual establece que "[n]o podrán derogarse por convenios particulares la ley es en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres", que como ya se dijo, en nuestro contexto debe ser interpretado a la luz de la Constitución Política." (...)*

En virtud del referido principio y su aplicación en el marco de intervención del Estado, para el particular, referida al transporte terrestre automotor de carga y su connotación de servicio público esencial, sostiene este Despacho que la libertad económica tiene un alcance y fines, los cuales deben ser vistos a la luz de la Carta Superior, motivo que nos conduce a observar la postura adoptada por el Tribunal Constitucional, mediante providencia C 186 de 2011, en la que fue reiterado que:

*(...) "Al respecto en la sentencia C-150 de 2003 se manifestó que la intervención estatal en el ámbito económico puede obedecer al cumplimiento de distintas funciones tales como la redistribución del ingreso y de la propiedad, la estabilización económica,*

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

*la regulación económica y social de múltiples sectores y actividades específicas según los diversos parámetros trazados por la Constitución. De igual manera, la Corte ha estimado que según su contenido, los actos de intervención pueden someter a los actores económicos a un régimen de declaración; a un régimen de reglamentación, mediante el cual se fijan condiciones para la realización de una actividad; a un régimen de autorización previa, que impide el inicio de la actividad económica privada sin que medie un acto de la autoridad pública que lo permita; a un régimen de interdicción que prohíbe ciertas actividades económicas juzgadas indeseables; y a un régimen de monopolio, mediante el cual el Estado excluye para sí ciertas actividades económicas y se reserva para sí su desarrollo sea de manera directa o indirecta según lo que establezca la Ley. Así las cosas, el Estado puede establecer diversas y complementarias formas de intervenir en la economía, sin que ello signifique que, en dicha labor, los poderes públicos no tengan límites señalados constitucionalmente.*

*De igual manera, en lo concerniente a los servicios públicos, la intervención económica adquiere una finalidad específica, consistente en asegurar la satisfacción de necesidades básicas que se logra con su prestación, y tiene un soporte constitucional expreso en el artículo 334 de la Carta. Pero, "adicionalmente, en tal materia el Estado dispone de especiales competencias de regulación, control y vigilancia, pues tal prestación se considera inherente a la finalidad social del Estado, por lo cual es deber de las autoridades asegurar que ella sea eficiente y cobije a todos los habitantes del territorio nacional". Así, por cuanto los servicios públicos son una actividad económica que compromete la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y por ello mismo la eficacia de ciertos derechos fundamentales, "la intervención del Estado en la actividad de los particulares que asumen empresas dedicadas a este fin es particularmente intensa, y su prestación se somete a especial regulación y control" (negrillas agregadas)." (...)*

Dicho lo anterior, se reitera que la intervención del Estado en particular frente a la actividad transportadora es asumida desde varios ángulos, siendo para el particular el económico, razón que nos lleva a reiterar que la limitación económica por parte del Estado de cara a los servicios públicos es entendida así:

*(...) "En lo concerniente a los servicios públicos, la intervención económica adquiere una finalidad específica, consistente en asegurar la satisfacción de necesidades básicas que se logra con su prestación, y tiene un soporte constitucional expreso en el artículo 334 de la Carta. Pero, "adicionalmente, en tal materia el Estado dispone de especiales competencias de regulación, control y vigilancia, pues tal prestación se considera inherente a la finalidad social del Estado, por lo cual es deber de las autoridades asegurar que ella sea eficiente y cobije a todos los habitantes del territorio nacional". Así, por cuanto los servicios públicos son una actividad económica que compromete la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y por ello mismo la eficacia de ciertos derechos fundamentales, "la intervención del Estado en la actividad de los particulares que asumen empresas dedicadas a este fin es particularmente intensa, y su prestación se somete a especial regulación y control" (...)*

De la anterior ilustración jurídica es claro que las relaciones económicas reconocidas y previstas para el transporte terrestre y, en particular, en la modalidad de carga, guardan armonía con las limitaciones económicas propias de la actividad, al permitir en cabeza de un particular la prestación de un servicio público esencial, que en desarrollo de la intervención misma del Estado garantiza el cumplimiento de los fines estatales y respeto de las garantías establecidas en la Carta Política.

Con fundamento en lo anterior, este Despacho concluye que el Investigado infringió lo establecido en el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

concordancia con el inciso primero del artículo 9 de la Ley 105 de 1993, por el desconocimiento de lo previsto en los artículos 2.2.1.7.6.7 y numeral 1, literal f) del artículo 2.2.1.7.6.9. del Decreto 1079 de 2015, con sujeción a lo establecido en los artículos 983 y 984 del Código de Comercio, que la investigada presentó escrito de descargos con radicado No. 20235342458992 del 09 de octubre de 2023, en contra de la Resolución de apertura No. 7184 del 18 de septiembre de 2023, dentro del término establecido por esta y presento escrito de alegatos de conclusión con radicado No. 20235342913172 del 27 de noviembre de 2023, dentro del término señalado por la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre en la Resolución No. 8463 del 06 de octubre de 2023.

Entrando entonces esta Dirección, a analizar los alegatos de conclusión de la investigada se establece que acepta su responsabilidad ante el cargo investigado es por esto y junto con todos los elementos probatorios se permite encontrar probada la responsabilidad del investigado y manifiesta esta Dirección que la expresa aceptación del cargo será tenida en cuenta para la graduación de la sanción.

Conforme lo expuesto, esta Superintendencia encuentra **PROBADA LA RESPONSABILIDAD** de la empresa investigada frente al **CARGO SEGUNDO**, motivo por el cual se impondrá una sanción a la misma.

**8.3.2. Respecto del cargo tercero por presuntamente omitir cancelar de manera oportuna el valor a pagar a los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos de transporte público de carga, de los cuatro (4) vehículos amparados mediante los manifiestos de carga relacionados.**

En la resolución de apertura se imputó al Investigado el presente cargo por presuntamente omitir cancelar de manera oportuna a los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos de transporte público de carga, de los vehículos amparados mediante los manifiestos de carga relacionados en la resolución de apertura, infringiendo lo establecido en el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con el inciso primero del artículo 9 de la Ley 105 de 1993, el artículo 983 del Código de Comercio y los artículos 2.2.1.7.4.4., 2.2.1.7.6.6. y 2.2.1.7.6.9. en su literal g) del decreto 1079 de 2015, del cual se extraen los siguientes supuestos de hecho.

- (i) Es deber de la empresa de transporte pagar de manera oportuna lo pactado al propietario, poseedor o tenedor del vehículo del servicio público de transporte terrestre según lo contenido en el Decreto 1079 de 2015.**
- (ii) Es obligación de las empresas de transporte efectuar al propietario, poseedor o tenedor del vehículo, el valor a pagar por las partes según lo contenido en el Decreto 1079 de 2015.**

Frente al particular este Despacho se sirve manifestar que mediante el Decreto 2092 de 2011 compilado por el Decreto 1079 de 2015 se establecieron las relaciones económicas entre los actores del transporte, en particular entre las empresas de transporte legalmente habilitadas y constituidas y los propietarios,

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

poseedores o tenedores de los vehículos de carga. Relación que genera a favor de este último actor el reconocimiento del valor a pagar<sup>33</sup>.

En razón a las relaciones económicas establecidas mediante el Decreto 1079 de 2015, se establece que los pagos del flete se deberán hacer a los cinco días hábiles del recibo de la cosa transportada.

Dicha norma actúa como un limitante de la voluntad contractual de las partes, estableciendo un límite claro a las potestades o facultades con que cuentan las empresas transportadoras en virtud de la relación contractual que tienen con los propietarios/poseedores o tenedores de los vehículos que vinculan en virtud del cumplimiento de su objeto social el cual se debe ajustar al marco de la intervención del Estado y la libertad económica en materia de servicios públicos.

Que según lo indicado en el escrito de alegatos de conclusión con radicado No. 20235342913172 del 27 de noviembre de 2023, se debió a una compensación por un pago que debió hacer la investigada como lo manifiesta "*BULK CARGO de acuerdo y con base en la ley ya que esta última debió cancelar las moras en la entrega del contenedor a la Naviera del generador de la carga*", es de anotar que para que opere la compensación se debe tener la calidad de deudor del crédito, que como lo manifiesta la investigada no tiene la presente calidad, por cuanto se insta a la investigada indicado que no puede nombrar de oficio un deudor solidario, por lo que se debió remitir a la justicia ordinaria para que se determinara la responsabilidad en cuanto al incumplimiento del contrato.

De la anterior ilustración jurídica es claro que las relaciones económicas reconocidas y previstas para el transporte terrestre y, en particular, en la modalidad de carga, guardan armonía con las limitaciones económicas propias de la actividad, al permitir en cabeza de un particular la prestación de un servicio público esencial, que en desarrollo de la intervención misma del Estado garantiza el cumplimiento de los fines estatales y respeto de las garantías establecidas en la Carta Política.

Con fundamento en lo anterior, este Despacho concluye que el Investigado infringió lo establecido en el literal e) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con el inciso primero del artículo 9 de la Ley 105 de 1993, el artículo 983 del Código de Comercio y los artículos 2.2.1.7.4.4., 2.2.1.7.6.6. y 2.2.1.7.6.9. en su literal g) del decreto 1079 de 2015, que la investigada presentó escrito de descargos con radicado No. 20235342458992 del 09 de octubre de 2023, en contra de la Resolución de apertura No. 7184 del 18 de septiembre de 2023, dentro del término establecido por esta y presento escrito de alegatos de conclusión con radicado No. 20235342913172 del 27 de noviembre de 2023, dentro del término señalado por la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre en la Resolución No. 8463 del 06 de octubre de 2023.

Entrando entonces esta Dirección, a analizar los alegatos de conclusión de la investigada se establece que acepta su responsabilidad ante el cargo investigado es por esto y junto con todos los elementos probatorios se permite encontrar probada la responsabilidad del investigado y manifiesta esta Dirección que la

---

<sup>33</sup> Es el valor a pagar establecido entre la empresa de transporte y el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de carga, teniendo en cuenta los costos eficientes de operación establecidos en el sistema de información de costos de referencia adoptado por el Ministerio de Transporte. Artículo 1 del Decreto 2092 de 2011.

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

expresa aceptación del cargo será tenida en cuenta para la graduación de la sanción.

Conforme lo expuesto, esta Superintendencia encuentra **PROBADA LA RESPONSABILIDAD** de la empresa investigada frente al **CARGO TERCERO**, motivo por el cual se impondrá una sanción a la misma.

**NOVENO:** Como consecuencia de lo anterior, este Despacho procederá a pronunciarse sobre la responsabilidad del Investigado como se pasa a explicar.

Se previó en la Ley 1437 de 2011 que “[e]l acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener (...) la decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación”.<sup>34</sup>

Al respecto, para el cargo investigado se ha identificado (i) la imputación fáctica y (ii) la imputación jurídica, verificando la congruencia de las mismas con la resolución de apertura.<sup>35</sup> Y, con base en las pruebas recaudadas en la investigación se procede a:

### **9.1. Exonerar**

**9.1.1.** Por NO incurrir en la conducta descrita en las disposiciones contenidas en el literal c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996., se exonera de responsabilidad por el **CARGO PRIMERO** formulado al investigado mediante la Resolución No. 7184 del 18 de septiembre de 2023.

### **9.2. Declarar responsable**

Por incurrir en la conducta del parágrafo 3 del artículo 93 de la Ley 769 de 2002 modificado por la Ley 1383 de 2010 y el Decreto 019 de 2012 se declara la responsabilidad por el **CARGO SEGUNDO** al Investigado, y se impondrá la sanción que a continuación se fijará y graduará.

<sup>34</sup> Cfr. Ley 1437 de 2011 artículo 49 numeral 4

<sup>35</sup> A este respecto, la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo han resaltado la importancia del Principio de Congruencia entre los hechos concretamente reprochados en la apertura y los hechos reprochados en el acto final:

La Corte Constitucional ha explicado que el principio de congruencia “es uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó. En este orden, se erige con tal importancia el principio de congruencia que su desconocimiento es constitutivo de las antes denominadas vías de hecho, hoy causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.” Cfr. H. Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013. M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto de que en las investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, indicó que se debe actuar “(...) exclusivamente contra las pruebas y motivaciones que sirvieron de base para la expedición del acto en mención, de allí que no deba referirse a temas y pruebas no contemplados en la resolución, puesto que no puede pretender ejercer defensa sobre actuaciones o imputaciones que no se han formulado, o pruebas sobre las cuáles no se han basado la acusaciones”. Cfr. H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección segunda, Subsección A, expediente No. AT-2014-0016-01 del 23 de febrero de 2015. Otras autoridades administrativas también han señalado que “[...] como se ha sostenido, en las investigaciones administrativas sancionatorias el eje central es la formulación de cargos por cuanto, es en ese momento en el cual se delimita la conducta reprochada – imputación fáctica-, las normas presuntamente vulneradas –imputación normativa- y el alcance del procedimiento, garantizándose de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa al investigado, por cuanto en ese instante procesal es en el cual va a saber a ciencia cierta de qué se le acusa y de qué situaciones debe defenderse. [...] de encontrarse en una investigación que no se cumplió con el principio de tipificación, el cual garantiza el debido proceso y derecho de defensa que le asiste al investigado, el operador administrativo está en la obligación de reestablecer los derechos fundamentales precitados, a través de la decisión que establezca precedente”. Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio Resoluciones 40564 de 2012 y 1516 de 2017



**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

Por incurrir en la conducta del literal b) del artículo 48 de la Ley 336 de 1996, se declarará la responsabilidad por el **CARGO TERCERO** al Investigado y se impondrán la sanción que a continuación se fijará y graduará.

**9.2.1. Sanciones procedentes**

De conformidad con lo previsto en la ley 105 de 1993, así como en la ley 769 de 2002, las sanciones aplicables, previamente establecidas en la resolución de apertura por violación a la normatividad de transporte son las siguientes:

**Para el cargo segundo:**

Ley 769 de 2002

**"Artículo 93. Control de infracciones de conductores.**

Parágrafo 3º Las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los conductores a su servicio. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las empresas de transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Las empresas que no cumplan con lo antes indicado serán sancionadas por dicha entidad con una multa equivalente a cien salados mínimos legales mensuales vigentes (100 smmlv)"

**Para el cargo tercero**

Ley 336 de 1996

*"Artículo 48. – "La cancelación de las licencias, registros, habilitaciones o permisos de operación de las empresas de transporte, procederá en los siguientes casos:*

*(...) b) "Cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los servicios por parte de la empresa transportadora (...)"*

**9.3 Graduación de la sanción**

Se previó en el artículo 50 de la ley 1437 de 2011 que "(...) la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: 1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos, 6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas".



**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

Para el caso que nos ocupa, la graduación corresponde a la siguiente

Al **CARGO SEGUNDO**, se procede a imponer una sanción a título de **MULTA de DOS MIL QUINIENTAS DOS (2.502) Unidades de Valor Tributario**; que, a su turno, equivalen a la suma de **NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/ CTE (\$90.852.600)** equivalente a 100 SMMLV al año 2021<sup>36-37</sup>.

Esta sanción se impone teniendo en cuenta el criterio de graduación del numeral 6) del artículo 50 de CPACA, al no dar cumplimiento a los criterios que regulan la optimización del flujo de información, como base para el monitoreo de imposición de infracciones de tránsito de los conductores y así controlar la eficiente prestación del servicio público de transporte en la modalidad de Carga a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos como bien jurídico tutelado.

Frente al **CARGO TERCERO**; con base en el numeral 6) se procede a imponer una sanción consistente en **LA CANCELACIÓN DE LA HABILITACIÓN EN LA MODALIDAD DE CARGA**, otorgada mediante la Resolución No. 477 del 15 de octubre de 2019, teniendo en cuenta que, la Investigada incurrió en una cesación injustificada de actividades contrariando el objeto de la habilitación, toda vez que, la prestación del servicio público debe ser de manera óptima, eficiente, continua e ininterrumpida<sup>38</sup> por parte de las empresas de transporte.

### **10.3 Pago de la multa por parte del infractor**

Respecto de la función que cumple esta actuación administrativa de carácter sancionatorio, el Consejo de Estado ha señalado que “[e]l fundamento de la potestad sancionatoria administrativa está en el deber de obediencia al ordenamiento jurídico que la Constitución Política en sus artículos 4 inciso segundo, y 95 impone a todos los ciudadanos”.

Entonces, la función es reafirmar la vigencia de la normatividad existente y el deber de obediencia de todos los ciudadanos, particularmente el infractor. Es por esa misma razón que las sanciones, tanto las no-pecuniarias como las pecuniarias, deben ser asumidas por el infractor mismo:

<sup>36</sup> La Resolución número 111 del 11 de diciembre de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fijó la Unidad de Valor Tributario (UVT) aplicable para el año /2021 en la suma de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$36.308.00).

Adicionalmente, de acuerdo con el Decreto 1785 del 29 de diciembre de 2020 el Salario Mínimo Mensual Vigente para la época de los hechos equivale a la suma de NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$908.526.00). Ahora bien, el inciso final del parágrafo 3 el artículo 204 del decreto 019 de 2012 que modificó el artículo 93 de la Ley 769 de 2002 prevé una sanción de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Siendo así, y en aplicación del artículo 49 de la ley 1955 de 2019, su equivalencia en UVT sería la siguiente:

Salarios mínimos legales mensuales vigentes	UVT
Un (1)	24,6525402
Setecientos (700)	17.256,7782

<sup>37</sup> El valor de la sanción se gradúa teniendo en cuenta las aproximaciones establecidas en el artículo 868 del Estatuto Tributario.

<sup>38</sup> “Artículo 5-El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo”

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

(i) En relación con las sanciones no-pecuniarias, de Perogrullo se nota que no es posible que un tercero “pague” a nombre del sancionado. Lo anterior, porque por ejemplo la prohibición de ejercer el comercio -entendido como una inhabilidad-, o la cancelación o suspensión de la habilitación, entre otras, es una limitación que se impone para la persona misma, sin que sea transferible a otros que no han sido sancionados.

(ii) Sobre las sanciones pecuniarias, la Corte Constitucional ha explicado que su función no es enriquecer al Estado y no debe ser vista como una acreencia civil que puede ser satisfecha por cualquier persona. Por el contrario, al tratarse de un castigo, independientemente de que la ley haya previsto expresamente la prohibición de pago por tercero no, el pago debe ser hecho por el infractor:

“La multa es, pues, una sanción cuyo monopolio impositivo está en manos del Estado, que la aplica con el fin de forzar, ante la intimidación de su aplicación, al infractor a fin de que no vuelva a desobedecer las determinaciones legales (...) Atendiendo a la naturaleza sancionatoria de la multa, la jurisprudencia ha entendido que aquella no configura una ‘deuda’ en el mismo sentido en que lo son los créditos civiles. (...) Y es que no existe razón alguna para considerar que, como en ambos casos el medio liberatorio de la obligación es el dinero, la naturaleza jurídica de los créditos sea la misma. (...) su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta socialmente reprochable.

“Como consecuencia de su índole sancionatoria, la multa no es apta de modificarse o extinguirse por muchas de las formas en que lo hacen los créditos civiles (...). No está en poder del sujeto pasivo la transacción del monto de la misma o la posibilidad de negociar su imposición, así como no podría éste -pese a una eventual aquiescencia del Estado- ceder su crédito a un particular distinto, pues la finalidad de la multa es la de castigar al infractor de la ley. (...) En fin, para la jurisprudencia ha sido claro que el carácter crediticio de la multa no la convierte en una deuda”.

En mérito de lo expuesto, esta Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO: EXONERAR** a la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S.** con **NIT 901322006 - 4**, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo del:

**CARGO CUARTO** Por NO incurrir en la conducta del literal c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996 y no transgredir lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.5.3., literales b) y c) del numeral 1) del artículo 2.2.1.7.6.9. del Decreto 1079 de 2015 y artículo 11 de la Resolución 377 de 2013.

**ARTICULO SEGUNDO:** Declarar **RESPONSABLE** a la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S.** con **NIT 901322006 - 4** de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución:

**RESOLUCIÓN No. 12732 DE 18/12/2023**

Del **CARGO SEGUNDO** por infringir lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 93 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010 y el Decreto 019 de 2012.

Del **CARGO TERCERO** por incurrir en la conducta y transgredir lo descrito en el literal b) del artículo 48 de la Ley 336 de 1996.

**ARTÍCULO TERCERO: SANCIONAR** a la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S.** con **NIT 901322006 - 4**, frente al:

Al **CARGO SEGUNDO**, se procede a imponer una sanción a título de MULTA de **DOS MIL QUINIENTAS DOS (2.502) Unidades de Valor Tributario**; que, a su turno, equivalen a la suma de **NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$90.852.600)** equivalente a 100 SMMLV al año 2021.

Frente al **CARGO TERCERO**; con base en el numeral 6) se procede a imponer una sanción consistente en **LA CANCELACIÓN DE LA HABILITACIÓN EN LA MODALIDAD DE CARGA**, otorgada mediante la Resolución No. 477 del 15 de octubre de 2019, teniendo en cuenta que, la Investigada incurrió en una cesación injustificada de actividades contrariando el objeto de la habilitación, toda vez que, la prestación del servicio público debe ser de manera óptima, eficiente, continua e ininterrumpida<sup>39</sup> por parte de las empresas de transporte.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para efectos del pago de la multa el sancionado deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme esta providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, comunicarse a las líneas telefónicas (57-1) 2693370 y línea gratuita nacional 01 8000 915 615, donde le será generado el recibo de pago con código de barras en el cual se detallará el valor a cancelar. El pago deberá realizarse en el BANCO DE OCCIDENTE a favor de la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE en la cuenta corriente 223-03504-9.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Efectuado el pago de la multa, la empresa sancionada deberá allegar al Grupo Financiero y Cobro Control de Tasa de Vigilancia, vía fax, correo certificado o a través de cualquier otro medio idóneo, copia legible del recibo de consignación indicando investigación administrativa Delegada de Tránsito, nombre y Nit de la empresa y número de la resolución de fallo.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Vencido el plazo de acreditación del pago sin que este se haya demostrado, se procederá a su cobro persuasivo y/o coactivo por parte del Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva de la Superintendencia de Transporte, teniendo en cuenta que la presente resolución presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011

---

<sup>39</sup> "Artículo 5-El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo"

RESOLUCIÓN No. **12732** DE **18/12/2023**

**ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR** el contenido de la presente Resolución por conducto de la Secretaría General de la Superintendencia de Transporte, al representante legal o quien haga sus veces de **SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE VELOZ S.A.S.** con **NIT 901322006 - 4**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

**ARTÍCULO QUINTO:** Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre y subsidiariamente el Recurso de Apelación ante el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme al artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO SEXTO:** Una vez surtida la respectiva notificación, remítase copia de la misma a la Dirección de Tránsito y Transporte para que obre dentro del expediente.

**ARTÍCULO SEPTIMO:** Una vez en firme la presente Resolución en los términos del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo remítase copia al Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva de la Superintendencia de Transporte para lo de su competencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado  
digitalmente por  
ARIZA MARTINEZ  
CLAUDIA MARCELA  
Fecha: 2023.12.19  
10:51:57 -05'00'

**CLAUDIA MARCELA ARIZA MARTÍNEZ**

Directora de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre

**12732 DE 18/12/2023**

**Notificar:**

**SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S..**

Representante Legal  
Dirección: CL 4 NRO. 17-84 Barrio Los Almendros  
Santa Marta – Magdalena

**Proyectó Profesional Contratista DITT:** Karen Coronado

**Revisó Profesional DITT:** Hanner Monguí

Este es un ejemplo de certificación que se expide solo para consulta, no tiene validez jurídica

---

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S.  
Sigla : TRANSERVIVELOZ S.A.S  
Nit : 901322006-4  
Domicilio: Santa Marta, Magdalena

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 220973  
Fecha de matrícula: 13 de septiembre de 2019  
Ultimo año renovado: 2023  
Fecha de renovación: 15 de junio de 2023  
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : CL 4 17 84 - Almendros  
Municipio : Santa Marta, Magdalena  
Correo electrónico : servivelez.sas@gmail.com  
Teléfono comercial 1 : 3234660655  
Teléfono comercial 2 : 3102397259  
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 4 17 84 - Almendros  
Municipio : Santa Marta, Magdalena  
Correo electrónico de notificación : servivelez.sas@gmail.com  
Teléfono para notificación 1 : 3234660655  
Teléfono notificación 2 : 3102397259  
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por documento privado del 10 de septiembre de 2019 de la Accionista Constituyente de Santa Marta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de septiembre de 2019, con el No. 60178 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S., Sigla TRANSERVIVELOZ S.A.S.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**HABILITACIÓN (ES) ESPECIAL (ES)**

Mediante inscripción No. 61240 de 12 de diciembre de 2019 se registró el acto administrativo No. 477 de 15 de octubre de 2019, expedido por Mintransporte, que lo habilita para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial.

Este es un ejemplo de certificación que se expide solo para consulta, no tiene validez jurídica

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto principal: Consiste en: 1. La prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, para transporte de personas, mercancía, bienes y cosas dentro del territorio nacional en cumplimiento de su objeto social, vender, comprar, permutar, arrendar, importar toda clase de vehículos automotores y actos tales como comprar, adquirir en cualquier forma bienes inmuebles y muebles, así como venderlos, administrarlos, tomarlos o darlos en prenda, arrendamiento, dar y recibir dinero en mutuo con o sin intereses. 2. Explotación de la industria del turismo y así podrá prestar el servicio de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial así como alojamiento y alimentación de sus usuarios; realizando viajes tipo excursiones, tours a los distintos sitios turísticos, históricos, escolares y culturales de Colombia. Y en general la empresa podrá ejecutar toda clase de actividad lícita relacionada con la explotación de la industria del transporte especial y el turismo. 2. Prestación del servicio de transporte terrestre automotor de carga. 3. Celebrar contratos de vinculación con los propietarios de vehículos de transporte conforme a las normas reglamentarias y toda actividad análoga para el buen desarrollo de las labores contenidas en el objeto social, y las dirigidas al cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales derivadas de la existencia y actividad de la sociedad conforme al artículo 29 del código de comercio tales como tomar o dar dineros en préstamo, dar garantía automotores, recibirlos, girar, cobrar, cancelar o pagar letras de cambio, cheques o cualquier otro instrumento negociable o aceptarlo en pago, suscribir o comprar intereses sociales en cualquier clase de sociedad, empresa o negocio que tenga la misma naturaleza, de las indicadas en el presente artículo. 4. Fusionarse en otro u otras sociedades igualmente afines con su objeto social las cuales tendrán el carácter de filiales y en general cualquier otro acto lícito de comercio que tenga por finalidad el mejor crecimiento, de desarrollo y cumplimiento de transporte automotor. 3. Constituirse en una empresa multinacional que podrá planear diseñar, organizar, coordinar, regular, dirigir, administrar, prestar, explorar y explotar el servicio público esencial de acarreo traslado y transporte de bienes y servicios y/o mercancías y/o carga en general en el ámbito y territorio nacional e internacional y fronterizo en el modo terrestre automotor de carga, operando por viaductos y carreteras municipales metropolitanas, asociativas, departamentales en redes carreteables nacionales - Ejes y corredores nacionales e internacionales en consecuencia. Podrá realizar directamente o por terceros operaciones y maniobras de cargue (sic) apoyo, transporte en todas sus modalidades descargue y todas aquellas tareas de soporte inherente actividades y funciones (sic) tendientes a ejecutar el traslado de cosas de un lugar a otro utilizando uno o varios modos de transporte de conformidad con las autorizaciones y habilitaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en la normatividad positiva (sic) vigente en la república de Colombia y en los países miembros de la comunidad andina de naciones del mercosur, del g-3 como también con los países del área de libre comercio de las américas alca. Se constituye y podrá ejecutar operaciones de transporte multimodal, nacional, internacional o T.M. Ofreciendo servicios integrales logísticos y de administración de carga, tráfico o rutas entre nuestro continente y el resto del mundo en igualdad de condiciones con operadores internacionales, arbitrando, conjugando, inter actuando y amortizando medios y modos de transporte propios y de terceros, empleando la logística y apoyo adecuado para que los usuarios aprovechen la infraestructura y adelantos tecnológicos de puertos Colombianos y latinoamericanos ofreciendo las mejores alternativas de rutas, fletes y tarifas administrando los diversos factores y elementos involucrado en la cadena de distribución física internacional, implementando el uso intensivo de contenedores con o en los modo (sic) terrestre, combinado, bimodal o intermodal (sic), multimodal, marítimo, aéreo fluvial, cabotaje, y férreo, pudiendo efectuar negociaciones y alianzas empresariales estratégicas y consorcios nacionales e internacionales dentro de su objeto y accionar social como organización mundial líder en servicios logísticos multimodales al transporte a la industria y al comercio. 6. Se encuentra autorizada expresamente para designar y ser agente o representante en Colombia (sic) de operadores, de transporte multimodal extranjeros, cumpliendo los tratados convenios acuerdos práctica, conferencias reservas decisiones y demás protocolos (sic) internacionales celebrados o acogidos por nuestro (sic) país. Ofreciendo mejores tiempos de respuesta a usuarios importadores, exportadores, y generadores de carga, incrementando volúmenes, de carga y ahorro en tiempos y costos como servicio. 1. Conexo: Prestará todos aquellos servicios adicionales a t. A carga y a los usuarios tales como: Outsourcing. Servicios de procura. 6. Compra o suministros gerencia de proyectos especiales, embalaje, marcado, rotulado. Consolidación. Agente de aduanas unificación fletes locales urbanos,



Este es un ejemplo de certificación que se expide solo para consulta, no tiene validez jurídica

servicios de montacargas y grúas especializadas, desunitización, abastecimientos corporativos, consignatarios declarante destinatario remitente, consolidador. Manipuleo, seguros trámites, almacenaje, documentación coordinador logísticos. 7. Asesor de transporte asistente y consultor en operaciones de apoyo de paso de frontera, embarcadores. Despachadores cubriendo las necesidades y enlaces nacionales que se requieran. 8. Se encuentra también (sic) autorizada para (sic) crear, implementar, digitar, prestar, facilitar, apoyar administrar y explotar económicamente los servicios públicos de transporte de carga paquetería, telemática y correo o mensajería especializada en conexión al exterior a nivel nacional o internacional con recolección y entregas personalizadas de acarreos envíos de correspondencia y demás objetos postales puerta a puerta, como operador logístico integral. En consecuencia, podrá abrir receptorías, adquirir, franquicias presentar. Consolidar clasificar empaçar despachar y entregar envíos de correspondencia y otros objetos postales tales como cartas tarjetas postales aerogramas, documentos, facturas extractos de cuentas recibos y soportes contables de toda clase, impresos periódicos envíos publicitarios muestras comerciales pequeños paquetes, carga liviana y. Demás objetos y elementos que puedan cursar por las redes postales del servicios de correos de los servicios de mensajería especializada con ámbito nacional e internacional, así mismo podrá administrar (sic) documentos, efectuar, tramites domicilios gestiones diligencias y encargos de terceros se encuentra autorizada para realizar (sic) actividades de agencia de carga y actividades de aduana, embarques internacionales, envíos urgentes y sensibles, empaque embalaje, asesoría en comercio exterior, podrá prestar servicio de facsímile telecomunicaciones centro de copiado, navegación en internet, servicios de computación y sistemas facilitando los equipos de telecomunicaciones necesarios. De igual forma se encuentra autorizada la empresa para facilitar (sic) servicios de personal (sic) de mensajería y apoyo de servicios y de jardinería (sic), servicio logísticos almacenamiento y bodegaje, bonificación y enrutamiento centros de correspondencia y carga trámites aduaneros servicios de terceracion y outsourcing (sic), impresión empaque y rotulación, valija empresarial administración de base de datos, verificación e investigación de solicitudes de crédito, visitas domiciliarias de seguridad, organización y custodia de archivos facilitar todos los servicios de apoyo secretarial, de papelería y misceláneos necesarios para generadores de carga, importación exportación usuarios y destinatarios. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

**CAPITAL**

\* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor	\$ 850.000.000,00
No. Acciones	850,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

\* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor	\$ 850.000.000,00
No. Acciones	850,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

\* CAPITAL PAGADO \*

Valor	\$ 850.000.000,00
No. Acciones	850,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad estara a cargo del representante legal y quien tendrá a su cargo la gestión y manejo de negocios sociales con sujeción a la ley. A estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la asamblea general de accionistas, quien podrá actuar individualmente y de manera autónoma. En las faltas temporales o absolutas será el representante legal suplente de la sociedad quien tendrá las mismas facultades. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones

Este es un ejemplo de certificación que se expide solo para consulta, no tiene validez jurídica

quedaran a cargo del representante legal de esta.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Como representantes legales de la compañía y, en su caso, el suplente, cada uno de ellos de manera individual, tienen facultades para ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad, y los que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la misma. El representante legal tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 1. Representar a la sociedad; 2. Nombrar o remover a todos los empleados y dependientes de la compañía, cuyo nombramiento y remoción no corresponda a la asamblea general; 3. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales que en nombre de la sociedad, la representen en juicio o fuera de él, y delegarles si fuera el caso las facultades que a bien tenga; 4. Hacer depósito en los bancos, manejar las cuentas en los mismos; 5. Velar por que todos los empleados y trabajadores de la empresa cumplan rigurosamente con sus obligaciones; 6. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas; 7. Ejercer las funciones que le delegue la asamblea general de accionistas y en general cumplir todas las gestiones inherentes al cargo de acuerdo con la ley y los estatutos sociales. La sociedad será gerenciada, y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Parágrafo: Los representantes legales de la sociedad no podrán realizar actos de 'disposición gratuita, ni de gravamen de los bienes sociales, así como tampoco podrán suscribir actos o contratos en cuantía que exceda la suma equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Limitaciones: Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o ir interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personas.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 002 del 16 de octubre de 2019 de la Asamblea General De Accionistas , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 24 de octubre de 2019 con el No. 60629 del libro IX, se designó a:

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
REPRESENTANTE LEGAL	YULIANA ALEJANDRA GARCIA RAMIREZ	C.C. No. 1.116.547.718

Por Acta No. 6 del 20 de noviembre de 2023 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 01 de diciembre de 2023 con el No. 81187 del libro IX, se designó a:

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
SUPLENTE	JUAN CARLOS OÑATE RINCON	C.C. No. 79.895.480

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

Este es un ejemplo de certificación que se expide solo para consulta, no tiene validez jurídica

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

#### SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Por documento privado del 30 de octubre de 2019 de el Representante Legal , inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de noviembre de 2019, con el No. 60737 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situación de control ejercida por william alejandro yakov compañía s.A.S (controlante) a servicios de carga y transportes veloz s.A.S. (Subordinada).

**\*\* EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** WILLIAM ALEJANDRO YAKOV COMPAÑIA S.A.S

#### **MATRIZ EN SITUACION DE CONTROL**

Identificación: 9012898503

Domicilio: 11001 - Bogota

País: Colombia

**\*\* EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTES VELOZ S.A.S.

Domicilio: Santa Marta, Magdalena

País: Colombia

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

**Actividad principal Código CIIU:** H4923

**Actividad secundaria Código CIIU:** H4921

**Otras actividades Código CIIU:** No reportó

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

#### INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$1.288.555.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : H4923.

#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Que la matrícula del comerciante y/o establecimiento de comercio localizado en la dirección que aparece reportada en este certificado, se informó a las secretarías de planeación, salud, gobierno, hacienda



CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 18/12/2023 - 11:41:08

Este es un ejemplo de certificación que se expide solo para consulta, no tiene validez jurídica

---

municipal de la alcaldía de Santa Marta y bomberos, a excepción de aquellos casos que no aplique. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la policía nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el registro único de identificación tributaria (RUIT). Los datos contenidos en esta sección de información complementaria, no hacen parte del registro público mercantil, ni son certificados por la cámara de comercio en ejercicio de sus funciones legales.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

---